

ISSN-L:3091-1893

doi 10.63803

VOL. 2, NÚM 2

# PRISMA JOURNAL

**Más allá de la ideología: educación, clase media y gobernanza en el Ecuador contemporáneo**

*Beyond Ideology: Education, the Middle Class, and Governance in Contemporary Ecuador*

**Paúl Urgilés Buestán**



paul.urgiles@ucacue.edu.ec

*Universidad Católica de Cuenca*

**Cuenca, Ecuador**



#### **Gestión editorial**

- Fecha de recepción (Received): 13 de abril de 2026.
- Fecha de aceptación (Accepted): 15 de mayo de 2026.
- Fecha de publicación (Published online): 20 de mayo de 2026.

**DOI:** <https://doi.org/10.63803/prisma.v2n2.25>

**2026**

**Más allá de la ideología: educación, clase media y gobernanza en el Ecuador contemporáneo**

*Beyond Ideology: Education, the Middle Class, and Governance in Contemporary Ecuador*

Resumen	Palabras clave
<p>Este artículo analiza el desempeño político e institucional del Ecuador desde una perspectiva estructural que trasciende la explicación basada exclusivamente en la orientación ideológica de los gobiernos. A partir de un enfoque analítico-interpretativo y del examen de literatura especializada e informes internacionales, se argumenta que la trayectoria del país está condicionada por la interacción entre educación, cultura política, clase media, corrupción institucional y economías ilícitas. El estudio muestra que la expansión de la educación formal no se ha traducido en inteligencia cognitiva colectiva ni en una cultura cívica robusta, lo que limita la calidad de la toma de decisiones públicas. Asimismo, se evidencia el carácter ambivalente de la clase media ecuatoriana y el impacto estructural del narcotráfico sobre la capacidad estatal. La comparación con experiencias internacionales exitosas sugiere que los modelos ideológicos mixtos, sostenidos por ciudadanía educada y burocracias profesionales, ofrecen mejores resultados que enfoques rígidos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Gobernanza</li> <li>● Educación</li> <li>● Clase media</li> <li>● Cultura política</li> <li>● Ecuador</li> </ul>

Abstract	Keywords
<p>This article analyzes Ecuador's political and institutional performance from a structural perspective that goes beyond explanations based exclusively on the ideological orientation of governments. Drawing on an analytical-interpretive approach and a review of specialized literature and international reports, it argues that the country's trajectory is shaped by the interaction among education, political culture, the middle class, institutional corruption, and illicit economies. The study shows that the expansion of formal education has not translated into collective cognitive intelligence or a robust civic culture, thereby constraining the quality of public decision-making. It also highlights the ambivalent character of the Ecuadorian middle class and the structural impact of drug trafficking on state capacity. Comparison with successful international experiences suggests that mixed ideological models, supported by an educated citizenry and professional bureaucracies, yield better outcomes than rigid approaches.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Governance</li> <li>● Education</li> <li>● Middle class</li> <li>● Political culture</li> <li>● Ecuador</li> </ul>

Citar (APA7): Urgilés Buestán, P. (2026). *Más allá de la ideología: Educación, clase media y gobernanza en el Ecuador contemporáneo*. Prisma Journal, 2(2), 298-312. <https://doi.org/10.63803/prisma.v2n2.25>

## Introducción

Ecuador suele ser descrito como un país estructuralmente favorecido. No es una exageración retórica. Se trata de uno de los territorios más biodiversos del planeta, con una localización geoestratégica que conecta el Pacífico sudamericano con rutas comerciales globales y con una dotación de recursos naturales que ha sostenido, durante décadas, buena parte de su economía. La coexistencia de la región amazónica, la cordillera andina, la costa y el archipiélago de las Galápagos configura una diversidad ecológica poco común, reconocida tanto por organismos internacionales como por el propio Estado ecuatoriano en sus instrumentos de planificación ambiental (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2016). Este capital natural, al menos en teoría, permitiría sostener un modelo de desarrollo basado en productividad, sostenibilidad y generación de valor agregado. La explicación parece simple. En la práctica, los resultados han sido más frágiles y discontinuos de lo esperado.

Desde el punto de vista productivo, la economía ecuatoriana se ha apoyado históricamente en un conjunto relativamente reducido de bienes primarios. El petróleo continúa siendo el principal rubro de exportación y una fuente clave de ingresos fiscales, seguido por productos agroindustriales como banano, camarón, cacao fino de aroma, atún y flores. Esta estructura ha permitido una inserción relativamente estable en los mercados internacionales, pero también ha consolidado una dependencia persistente de los precios externos y de la demanda internacional (World Bank Group, 2024). Incluso en períodos de bonanza —como el experimentado entre 2006 y 2014— dicha especialización no logró traducirse en una diversificación productiva sostenida ni en un fortalecimiento institucional equivalente. El contraste aparece con claridad: el país quedó expuesto a shocks fiscales recurrentes, endeudamiento estructural y ajustes macroeconómicos de corto plazo.

El componente ambiental refuerza esta paradoja. Ecuador ha sido presentado con frecuencia como un laboratorio global de conservación, particularmente por la protección del archipiélago de las Galápagos y los debates en torno a la explotación petrolera y minera en la Amazonía. La tensión entre extractivismo, sostenibilidad y conflictividad social, sin embargo, ha sido persistente. Informes recientes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del Banco Mundial coinciden en que la presión sobre ecosistemas estratégicos, combinada con capacidades estatales limitadas para regular, fiscalizar y generar consensos territoriales, termina erosionando tanto el capital natural como la legitimidad institucional (United Nations Development Programme, 2020); (World Bank Group, 2024). El problema, por tanto, no radica en la existencia de recursos. Radica en los arreglos políticos e institucionales que definen su gestión.

En el plano político, Ecuador ha transitado por una alternancia ideológica recurrente desde su conformación republicana, sin que ello haya derivado en la consolidación de un modelo de desarrollo sostenido. Los gobiernos identificados con la derecha conservadora o liberal —como los de Gabriel García Moreno (dos periodos entre 1861–1875), Camilo Ponce Enríquez (1956–1960), León Febres Cordero (1984–1988) y Sixto Durán Ballén (1992–1996)— impulsaron agendas orientadas al fortalecimiento del orden institucional, la apertura económica y la promoción de la iniciativa privada como motor del crecimiento. En distintos momentos, estas administraciones lograron avances parciales en estabilidad macroeconómica, control inflacionario o atracción de inversión,

especialmente bajo enfoques tecnocráticos y de disciplina fiscal. Tales logros, no obstante, coexistieron con elevados costos sociales, conflictividad laboral, concentración del poder económico y una limitada capacidad para institucionalizar políticas públicas de largo plazo que trascendieran los ciclos gubernamentales (Conaghan, 1995); (Bertelsmann Stiftung, 2022).

En una fase más reciente, el gobierno de orientación liberal encabezado por Daniel Noboa, en funciones desde finales de 2023, ha retomado un discurso centrado en eficiencia estatal, seguridad interna y reactivación económica apoyada en la confianza del sector privado y la cooperación internacional. Este enfoque ha buscado diferenciarse tanto del estatismo expansivo del ciclo progresista previo como de las formas tradicionales de conservadurismo político. Los resultados macroeconómicos y sociales observados hasta el momento, sin embargo, muestran avances modestos y fragmentarios. Las restricciones fiscales severas, los altos niveles de endeudamiento, una crisis de seguridad sin precedentes y una capacidad estatal limitada para ejecutar reformas estructurales profundas condicionan su desempeño. Evaluaciones recientes coinciden en que, más allá del cambio discursivo, persisten problemas estructurales asociados a debilidad institucional, baja productividad y fragilidad del aparato administrativo, reforzando una percepción de continuidad —más que de ruptura— en la trayectoria histórica del país (World Bank Group, 2024); (Bertelsmann Stiftung, 2024).

Desde la izquierda política, la experiencia ecuatoriana ha estado marcada por proyectos de transformación ambiciosos que también enfrentaron serias dificultades para consolidarse institucionalmente. Eloy Alfaro, líder de la Revolución Liberal a fines del siglo XIX e inicios del XX, impulsó reformas estructurales de gran calado —como la separación Iglesia–Estado, el laicismo educativo y la modernización de la infraestructura nacional— que redefinieron la organización política del país. Su proyecto, vale la pena recordarlo, encontró fuertes resistencias de las élites conservadoras y careció de un aparato estatal suficientemente sólido para sostener sus transformaciones en el tiempo. Décadas más tarde, José María Velasco Ibarra, presidente en cinco ocasiones entre 1934 y 1972, encarnó una izquierda populista de fuerte contenido personalista que apeló a la movilización popular y al discurso soberanista. Por cierto, su recurrencia en el poder no fortaleció la institucionalidad: derivó de forma reiterada en crisis políticas, rupturas constitucionales y una débil construcción de capacidades estatales (De la Torre, 2018).

Un enfoque distinto emergió con el gobierno socialdemócrata de Rodrigo Borja (1988–1992), que intentó fortalecer el Estado de derecho, ampliar políticas sociales y normalizar el funcionamiento democrático tras un prolongado período de inestabilidad. Su gestión estuvo condicionada por restricciones macroeconómicas severas, fragmentación legislativa y una estructura estatal frágil, lo que redujo el alcance de sus reformas. Más recientemente, el ciclo progresista liderado por Rafael Correa (2007–2017) reinstaló al Estado como actor central del desarrollo mediante una expansión significativa del gasto público, reformas constitucionales y políticas redistributivas financiadas por altos ingresos petroleros. Si bien este período registró mejoras tangibles en infraestructura y reducción de pobreza, también consolidó una alta concentración de poder, debilitó los contrapesos institucionales y dejó un esquema fiscal e institucional poco sostenible una vez agotado el ciclo de bonanza (World Bank, 2021); (Bertelsmann Stiftung, 2022).

La experiencia ecuatoriana sugiere, entonces, que el desempeño político y económico del país no puede explicarse únicamente por el signo ideológico de sus gobernantes. ¿Por qué gobiernos de orientaciones opuestas producen, en el largo plazo, resultados igualmente frágiles? La literatura contemporánea en gobernanza ofrece una respuesta menos personalizada y más estructural: los resultados dependen de la interacción entre liderazgo político, capacidades estatales y calidad de la ciudadanía que participa en el proceso democrático (World Bank, 2017). Cuando estas dimensiones no se articulan, las reformas —sean de mercado o de Estado— tienden a diluirse.

En este punto, el papel de la sociedad adquiere centralidad analítica. En particular, la clase media emerge como un actor clave, no solo por su peso demográfico, sino por su ubicación funcional dentro del aparato estatal y productivo. Estudios recientes muestran que este grupo concentra buena parte del capital humano, ocupa posiciones intermedias de decisión y actúa como puente entre élites políticas y sectores populares (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2019). En América Latina, la clase media ha demostrado ser especialmente sensible a crisis económicas, inseguridad y deterioro institucional, lo que se traduce en volatilidad política, polarización y debilitamiento de la confianza democrática (World Bank, 2021).

En Ecuador, la clase media ha crecido en tamaño, pero no necesariamente en cohesión ni en capital cívico. Informes regionales advierten que una proporción significativa de este grupo es vulnerable a recaer en pobreza ante shocks económicos o institucionales, afectando sus expectativas, su comportamiento político y su disposición a sostener pactos sociales de largo plazo (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2023). ¿Puede una democracia consolidarse cuando una parte central de su electorado se siente permanentemente amenazada o frustrada? La evidencia comparada sugiere que no.

Bajo esta óptica, el presente estudio parte de una premisa fundamental: la suerte política y económica de un país no descansa exclusivamente en la figura del presidente ni en su equipo inmediato, sino en la calidad del entramado social e institucional que lo sostiene. La ciudadanía —y en particular la clase media— no solo elige gobernantes; también condiciona la calidad del debate público, la tolerancia al abuso de poder y la viabilidad de reformas estructurales. A partir de este enfoque, el trabajo se propone analizar la incidencia política y administrativa de la clase media ecuatoriana, especialmente aquella situada en posiciones estratégicas de decisión dentro del sector público y privado, como un factor decisivo —aunque con frecuencia subestimado— para comprender los límites y posibilidades del desarrollo nacional.

## Metodología

### Educación, inteligencia colectiva y toma de decisiones en el desarrollo nacional

La relación entre educación y desarrollo ha sido ampliamente discutida en la literatura económica y política, aunque con énfasis dispares. En su formulación más extendida, la educación se asocia a la acumulación de capital humano y al aumento de la productividad individual. Esta lectura, sin embargo, resulta insuficiente para explicar por qué países con niveles comparables de escolaridad formal exhiben desempeños políticos, económicos e institucionales tan distintos. La evidencia

comparada sugiere que el factor decisivo no es únicamente la cantidad de educación, sino su articulación con capacidades cognitivas, pensamiento crítico y cultura cívica. Aquí aparece el primer matiz relevante.

Desde la economía política institucional, el desarrollo sostenido depende de la calidad de las decisiones colectivas que una sociedad es capaz de producir de manera reiterada. Dichas decisiones no se agotan en el acto electoral. Incluyen, además, la aceptación de reglas impersonales, la disposición a cumplirlas, la evaluación racional de políticas públicas y la capacidad de corregir errores sin recurrir a rupturas institucionales. Acemoglu y Robinson (Acemoglu & Robinson, 2012) subrayan que las instituciones inclusivas no emergen espontáneamente: requieren ciudadanos capaces de comprender su importancia y de defenderlas frente a intereses particulares, incluso cuando ello implica costos inmediatos.

En este marco, la noción de inteligencia colectiva resulta central. Más allá del nivel educativo individual, esta se refiere a la capacidad de una sociedad para procesar información compleja, deliberar de manera razonada y tomar decisiones orientadas al largo plazo. Sociedades con altos niveles de inteligencia colectiva tienden a penalizar políticamente la corrupción, la improvisación y la incompetencia técnica, generando incentivos relativamente estables para una gobernanza de calidad (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2019). Cuando esta capacidad es débil, la política se vuelve más emocional, polarizada y vulnerable a discursos simplificadores. El efecto es acumulativo.

Conviene precisar que la inteligencia colectiva no implica tecnocracia cerrada ni elitismo cognitivo. Se trata, más bien, de la capacidad social para reconocer los límites del conocimiento propio, valorar la evidencia empírica y delegar decisiones complejas en instituciones especializadas sin renunciar al control democrático. Cuando esta competencia está ausente, la deliberación pública se degrada y la toma de decisiones se desplaza hacia lógicas identitarias o clientelares. El problema no es la participación. Es su calidad.

### **Experiencias comparadas: ideologías mixtas y sociedades de alto desempeño**

Las trayectorias de los países desarrollados muestran que el éxito político y económico no responde a la aplicación rígida de una ideología única, sino a arreglos institucionales híbridos sostenidos por educación, cultura cívica y racionalidad colectiva. El caso de Estados Unidos ilustra esta lógica con claridad. Aunque suele asociarse a una ideología liberal de mercado, su desarrollo histórico combinó incentivos a la iniciativa privada con una fuerte inversión pública en educación superior, ciencia, tecnología e innovación. Programas como el GI Bill o el financiamiento estatal a universidades e investigación científica evidencian que el crecimiento estadounidense se apoyó en una mezcla pragmática de mercado y Estado, más que en un liberalismo doctrinario puro (Goldin & Katz, 2008). Cuando esta combinación se debilita, como ha ocurrido en décadas recientes, emergen fenómenos de polarización política y deterioro del consenso democrático.

Un caso particularmente ilustrativo es Alemania. Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, el país construyó un modelo de economía social de mercado que combinó disciplina fiscal, apertura económica y una fuerte inversión en educación técnica, formación profesional y cohesión social. El

sistema de educación dual alemán, estrechamente vinculado al sector productivo, no solo fortaleció la competitividad industrial, sino que también consolidó una cultura de responsabilidad, cooperación y respeto por las instituciones. Conviene advertir que este modelo no es directamente transferible a otros contextos. Aun así, su lógica general permite altos niveles de productividad, estabilidad política y bienestar social sostenido (World Bank, 2017).

Japón y Corea del Sur ofrecen ejemplos aún más claros del vínculo entre educación, cultura y decisiones colectivas. Ambos países, devastados por conflictos bélicos y con escasos recursos naturales, apostaron por sistemas educativos altamente exigentes, disciplina social y una estrecha coordinación entre Estado, empresas y sociedad. En Japón, la educación no solo priorizó el rendimiento académico, sino también valores como la responsabilidad colectiva, el respeto a la autoridad institucional y la mejora continua. Corea del Sur, por su parte, transformó en pocas décadas una economía agraria en una potencia industrial y tecnológica, apoyándose en una ciudadanía altamente educada y en una cultura que valoriza el esfuerzo, el mérito y la planificación de largo plazo (United Nations Development Programme, 2020). No fue un proceso espontáneo.

En Europa, Suiza y los países nórdicos refuerzan esta lectura. Suiza, asociada a una ideología de centro-derecha, combina mercados competitivos con una democracia directa que exige un electorado informado y responsable. Los países nórdicos —como Noruega, Suecia o Dinamarca—, frecuentemente identificados con la centro-izquierda, articulan un Estado de bienestar amplio con disciplina fiscal, transparencia y mercados eficientes. En ambos casos, el denominador común no es la ideología. Es una ciudadanía altamente educada, con elevados niveles de confianza social y una cultura política que penaliza severamente el abuso de poder (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2019).

Estos casos sugieren que las ideologías mixtas, cuando se sostienen sobre educación de calidad, inteligencia colectiva y cultura cívica robusta, tienden a producir resultados superiores a los modelos ideológicamente rígidos. La clave está en la coherencia institucional, no en la pureza doctrinaria.

### **Cultura cívica, capital cultural y calidad democrática**

La educación formal, aun siendo fundamental, no agota los mecanismos que vinculan ciudadanía y desarrollo. La cultura cívica —entendida como el conjunto de valores, normas y disposiciones que orientan el comportamiento político— desempeña un papel igualmente decisivo. En las democracias consolidadas, esta cultura se expresa en el respeto por las reglas, la aceptación del disenso y la disposición a resolver conflictos mediante canales institucionales. Nada de esto ocurre por inercia.

El concepto de capital cultural permite profundizar este análisis. Incluye la capacidad de interpretar la complejidad social, evaluar argumentos basados en evidencia y participar en la esfera pública de manera informada. En sociedades con alto capital cultural, la política tiende a ser menos personalista y más programática, lo que favorece la continuidad de políticas públicas y la estabilidad institucional (World Bank, 2017). Cuando este capital es escaso, la política se vuelve más volátil.

En América Latina, y particularmente en países como Ecuador, la expansión de la escolaridad no siempre ha ido acompañada de una consolidación equivalente del capital cívico. Esto ayuda a explicar por qué electorados con niveles educativos medios o altos pueden sostener prácticas políticas

polarizadas o tolerar debilidades institucionales persistentes. La educación amplía el acceso a información, pero no garantiza, por sí sola, la capacidad de procesarla críticamente. Vale la pena subrayarlo.

### **Clase media, educación y racionalidad política**

Dentro de este marco, la clase media ocupa una posición estratégica. En los países desarrollados, su expansión estuvo acompañada por movilidad social, empleo formal y protección institucional, lo que reforzó el compromiso con reglas democráticas y políticas públicas basadas en evidencia (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2019). En estos contextos, la clase media actúa como estabilizador institucional y como demandante de eficiencia estatal. El efecto suele ser virtuoso.

Cuando estas condiciones no existen, el resultado puede invertirse. Una clase media educada pero vulnerable, expuesta a shocks económicos y con expectativas frustradas, tiende a desarrollar comportamientos políticos erráticos y defensivos. Informes del Banco Mundial muestran que en América Latina la fragilización de la clase media ha estado asociada a ciclos de inestabilidad política, polarización y deterioro democrático (World Bank, 2021). No es una excepción regional.

### **Implicaciones teóricas para el análisis del caso ecuatoriano**

El marco teórico desarrollado sugiere que el desarrollo político y económico de un país no depende de la adhesión a una ideología específica, sino de la capacidad de articular modelos mixtos sostenidos por educación de calidad, inteligencia colectiva y cultura cívica robusta. Las experiencias de Estados Unidos, Alemania, Japón, Corea del Sur, Suiza y los países nórdicos muestran que el éxito se construye mediante combinaciones pragmáticas de mercado, Estado y ciudadanía responsable. El patrón es consistente.

Desde esta perspectiva, el análisis del caso ecuatoriano debe desplazarse del liderazgo presidencial hacia los comportamientos sociales que lo legitiman o lo limitan. La calidad de la educación, el nivel de cultura política y el rol de la clase media como actor político-administrativo emergen, así como variables explicativas centrales. Sobre esta base teórica se desarrolla, en las secciones siguientes, el análisis del caso ecuatoriano.

## **Resultado**

### **Análisis del caso ecuatoriano**

#### **Educación, inteligencia cognitiva y racionalidad social**

El sistema educativo ecuatoriano ha ampliado de manera sostenida su cobertura en las últimas décadas, especialmente en los niveles de educación básica y media. Este avance cuantitativo, sin embargo, no se ha traducido en un fortalecimiento equivalente de las capacidades cognitivas necesarias para sostener decisiones colectivas complejas. Informes internacionales coinciden en que el aumento de años de escolaridad no garantiza pensamiento crítico, comprensión lectora profunda ni

razonamiento lógico aplicado, habilidades fundamentales para la deliberación democrática y la evaluación de políticas públicas (World Bank, 2018); (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2019). El desfase es evidente.

Esta limitación cognitiva tiene consecuencias visibles en la esfera pública. Una parte significativa de la ciudadanía interpreta fenómenos complejos —violencia, corrupción, inseguridad— mediante esquemas binarios y simplificadores. Un ejemplo particularmente preocupante es la normalización social de la violencia carcelaria, donde no pocos ciudadanos expresan que las muertes entre personas privadas de libertad “no importan” o incluso resultan “deseables” por tratarse de “delincuentes”. Este razonamiento no solo revela una comprensión limitada del Estado de derecho, sino que entra en contradicción directa con los principios básicos del derecho penal moderno y de los sistemas jurídicos contemporáneos, los cuales establecen que la privación de libertad no suspende el derecho a la vida ni delega la violencia al azar. Esto conviene decirlo con claridad.

Desde una perspectiva institucional, esta aceptación social de la violencia constituye una señal inequívoca de bajo control estatal del sistema penitenciario, no de eficacia. Organismos internacionales han advertido que el colapso del control carcelario en Ecuador refleja fallas estructurales de gobernanza y capacidad institucional, más que un fenómeno inevitable asociado al delito (United Nations Office on Drugs and Crime, 2024); (Human Rights Watch, 2024). La tolerancia social frente a estas muertes no es un síntoma de fortaleza moral. Es una expresión de anomia, entendida como la erosión de normas compartidas que regulan la convivencia social.

### **Cultura política, polarización ideológica y empobrecimiento del debate público**

La debilidad cognitiva colectiva se proyecta también en la forma en que amplios sectores de la sociedad interpretan la política. En el debate público ecuatoriano es frecuente la generalización indiscriminada, donde se atribuye a “los socialistas” o a “los capitalistas” la totalidad de los problemas nacionales, vinculándolos de manera automática con narcotráfico, corrupción, lavado de dinero o inseguridad. Este tipo de razonamiento, lejos de aportar claridad, reduce la densidad analítica del debate político y bloquea cualquier discusión basada en evidencia empírica.

La literatura sobre cultura política advierte que la polarización extrema suele estar asociada a bajos niveles de alfabetización cívica y a una capacidad limitada para distinguir entre responsabilidades individuales, fallas institucionales y dinámicas estructurales (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2023). En Ecuador, esta polarización se traduce en una política altamente emocional, donde la adscripción ideológica reemplaza al análisis de políticas públicas concretas. El resultado es una ciudadanía que castiga o apoya gobiernos no por resultados verificables, sino por afinidades identitarias o rechazos simbólicos. El patrón se repite.

Este esquema tiene un efecto corrosivo sobre las instituciones. Cuando la política se reduce a una disputa moral entre “buenos” y “malos”, la corrupción deja de ser un problema sistémico y se convierte en un arma retórica contra el adversario. Informes comparados sobre gobernanza en América Latina muestran que esta lógica debilita la presión social para construir mecanismos impersonales de control y rendición de cuentas, facilitando la reproducción de prácticas corruptas bajo gobiernos de distinto signo político (Bertelsmann Stiftung, 2024).

## Clase media, educación formal y contradicciones institucionales

La clase media ecuatoriana ocupa una posición central en este entramado. Por un lado, concentra una proporción relevante del capital educativo y técnico del país; por otro, enfrenta una alta vulnerabilidad económica que condiciona su comportamiento político. Estudios del Banco Mundial muestran que una parte significativa de la clase media latinoamericana se encuentra apenas por encima del umbral de pobreza, lo que la hace particularmente sensible a crisis económicas y shocks fiscales (World Bank, 2021). El margen de error es estrecho.

Esta fragilidad explica, en parte, la ambivalencia política de la clase media. Aunque demanda eficiencia estatal y rechaza discursivamente la corrupción, también tiende a respaldar soluciones de corto plazo o arreglos informales cuando percibe amenazada su estabilidad económica. En el ámbito institucional, esta contradicción se traduce en tolerancia selectiva a prácticas irregulares, especialmente cuando estas no afectan de manera inmediata su bienestar o su seguridad personal.

En sectores clave del Estado —policía, fuerzas armadas, sistema judicial y administración pública—, los mandos medios suelen pertenecer a esta clase media vulnerable. La literatura sobre corrupción institucional advierte que no es necesaria una cooptación masiva para degradar el funcionamiento estatal: basta con redes pequeñas, ubicadas en nodos estratégicos, expuestas a soborno, intimidación o incentivos perversos (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2021); (Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2025). El daño, aunque localizado, es sistémico.

## Educación superior, burocracia y corrupción institucional

La expansión de la educación superior en Ecuador no ha venido acompañada de una profesionalización equivalente de la burocracia estatal. La alta rotación de funcionarios, la politización de cargos técnicos y la debilidad de la carrera administrativa erosionan la memoria institucional y reducen la eficacia del Estado en la implementación de políticas públicas. Evaluaciones del Banco Mundial identifican estas características como factores estructurales de baja efectividad gubernamental en países de ingreso medio (World Bank, 2017). No es un fenómeno excepcional.

Este entorno facilita la corrupción institucional, entendida no solo como actos individuales de enriquecimiento ilícito, sino como prácticas sistemáticas que distorsionan la ejecución de decisiones públicas. Informes de la OECD sobre integridad pública en Ecuador señalan brechas persistentes entre normativa y aplicación, así como debilidades en los sistemas de control interno y en los mecanismos de sanción efectiva (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2021). En este contexto, la corrupción deja de ser una anomalía. Se convierte en un costo operativo asumido por actores públicos y privados.

## Narcotráfico, economía ilícita y captura de nodos institucionales

El narcotráfico ha intensificado estas dinámicas. UNODC identifica a Ecuador como un corredor estratégico para el tráfico de cocaína hacia Europa, con un crecimiento significativo del uso de puertos ecuatorianos en los últimos años (United Nations Office on Drugs and Crime, 2023); (United Nations Office on Drugs and Crime, 2024). Aunque no existen cifras oficiales que permitan afirmar porcentajes globales precisos, sí hay consenso en que el país ha ganado relevancia logística dentro del comercio ilícito transnacional. El cambio es reciente, pero profundo.

La superposición entre infraestructura legal de exportación y economías ilícitas ha generado presiones adicionales sobre instituciones ya frágiles. Investigaciones internacionales documentan cómo sectores exportadores, logística portuaria y transporte se convierten en puntos vulnerables cuando los controles estatales son débiles o inconsistentes (Monde, 2025). El problema central no es únicamente criminal. Es institucional: la captura de nodos críticos permite al narcotráfico operar sin necesidad de controlar el Estado en su conjunto.

La penetración selectiva en agencias de seguridad y justicia ha sido advertida por múltiples análisis comparados. El Global Organized Crime Index señala que Ecuador enfrenta desafíos persistentes de infiltración institucional mediante corrupción y colusión localizada, especialmente en contextos de bajos salarios, alta rotación y presión criminal directa (Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2025); (International Crisis Group, 2025). Basta poco para desestabilizar mucho.

### Síntesis analítica del caso ecuatoriano

El análisis del caso ecuatoriano muestra que las restricciones al desarrollo político e institucional no se explican únicamente por la orientación ideológica de los gobiernos ni por la calidad individual de sus líderes. La combinación de bajo desarrollo de inteligencia cognitiva colectiva, polarización ideológica simplificadora, fragilidad de la clase media y corrupción institucional configura un entorno donde las reformas estructurales encuentran límites persistentes. El patrón es consistente.

La normalización social de la violencia, la generalización ideológica y la tolerancia selectiva a la corrupción no son fenómenos aislados. Constituyen expresiones de una cultura política debilitada que erosiona la capacidad del Estado para sostener reglas impersonales y políticas de largo plazo. Mientras estas condiciones persistan, los cambios de gobierno seguirán produciendo resultados parciales y transitorios, con independencia del signo político que los impulse.

### Discusión

Los resultados del estudio confirman una regularidad persistente en la trayectoria política e institucional del Ecuador: la alternancia ideológica en el poder no ha producido transformaciones estructurales sostenidas en el desempeño económico, social ni estatal. Este patrón obliga a desplazar el foco interpretativo desde la figura del gobernante o el signo político del gobierno hacia condiciones más profundas, relacionadas con la calidad de la ciudadanía, la cultura política dominante y la

capacidad efectiva del Estado para sostener reglas impersonales en el tiempo. El problema, por tanto, es menos coyuntural de lo que suele asumirse.

Uno de los hallazgos más relevantes es la desconexión entre la expansión de la educación formal y la consolidación de una racionalidad política colectiva. A pesar del aumento en los niveles de escolaridad, amplios sectores de la sociedad continúan mostrando dificultades para procesar información compleja, evaluar políticas públicas más allá del corto plazo y sostener consensos mínimos sobre el funcionamiento del Estado de derecho. Este desfase ayuda a explicar por qué el debate público se caracteriza con frecuencia por narrativas simplificadoras, respuestas emocionales y una baja tolerancia a reformas graduales, incluso cuando estas resultan necesarias. ¿Puede una democracia producir resultados estables cuando la deliberación colectiva se apoya en esquemas binarios y juicios morales inmediatos? La evidencia sugiere que ello es, como mínimo, poco probable.

Esta debilidad cognitiva se manifiesta de manera particularmente preocupante en la normalización social de la violencia. La aceptación, por parte de ciertos sectores, de las muertes ocurridas en centros penitenciarios como un hecho “natural” o incluso “conveniente” revela una comprensión limitada de los principios jurídicos fundamentales. Lejos de interpretarse como una señal de control del delito, esta tolerancia expresa la erosión de normas básicas de convivencia y la aceptación implícita de la ausencia de control estatal. En términos analíticos, se trata de un fenómeno de anomia que no solo refleja fallas institucionales, sino también una cultura política debilitada que trivializa la violencia cuando esta se dirige contra grupos socialmente estigmatizados. No es un detalle menor.

Este análisis cuestiona, además, la tendencia recurrente a explicar los problemas nacionales mediante la demonización ideológica. La generalización que atribuye a “la izquierda” o “la derecha” la totalidad de los males del país —corrupción, inseguridad, narcotráfico o crisis económica— no solo carece de rigor analítico, sino que reduce la densidad del debate público. Este tipo de razonamiento sustituye la evaluación de políticas concretas por identidades políticas rígidas, debilitando la presión ciudadana para construir instituciones sólidas y mecanismos efectivos de rendición de cuentas. En este contexto, la corrupción deja de ser un problema estructural para convertirse en una acusación selectiva dirigida al adversario político.

El papel de la clase media emerge como un elemento central de esta dinámica. Aunque concentra una parte significativa del capital educativo y ocupa posiciones intermedias clave en la administración pública y en sectores estratégicos, su elevada vulnerabilidad económica limita su capacidad para actuar como estabilizador institucional. La combinación de inseguridad, precariedad y expectativas de movilidad frágil reduce la disposición de este grupo a respaldar reformas estructurales que implican costos iniciales. En lugar de sostener una demanda consistente de legalidad y profesionalización estatal, la clase media tiende a oscilar entre la exigencia de eficiencia y la aceptación pragmática de arreglos informales que, con el tiempo, erosionan al propio Estado. El efecto es acumulativo.

La incorporación de la dimensión del narcotráfico profundiza esta lectura estructural. La expansión de economías ilícitas no solo incrementa la violencia, sino que altera de manera significativa los incentivos institucionales y sociales. Cuando el narcotráfico se inserta en circuitos logísticos formales y penetra nodos específicos del aparato estatal, eleva los costos de gobernar y reduce la efectividad

de cualquier proyecto político, independientemente de su orientación ideológica. La captura selectiva de puntos estratégicos —más que la cooptación total del Estado— resulta suficiente para distorsionar la implementación de políticas públicas, debilitar la autoridad institucional y reforzar la percepción ciudadana de impunidad. Basta poco para generar efectos amplios.

Este fenómeno tiene efectos particularmente corrosivos sobre la confianza social. La percepción de que el Estado no controla plenamente su territorio, sus cárceles o sus instituciones de seguridad alimenta demandas de soluciones excepcionales y respuestas de fuerza, muchas veces desconectadas de marcos jurídicos y de derechos. De este modo, la expansión del crimen organizado no solo desafía al Estado desde fuera, sino que reconfigura las expectativas sociales sobre legalidad, justicia y orden, cerrando un círculo de debilitamiento institucional difícil de revertir.

Otro eje que emerge del análisis es la brecha persistente entre el diseño de políticas y su ejecución. La expansión de la educación superior no ha ido acompañada de una profesionalización sostenida de la burocracia ni de la consolidación de una carrera administrativa estable. La alta rotación, la politización de cargos técnicos y la fragilidad de los sistemas de control interno reducen la capacidad estatal para implementar políticas complejas y sostenerlas en el tiempo. Esta brecha refuerza la percepción de improvisación y limita los incentivos sociales para apoyar reformas de largo alcance. El desgaste es silencioso.

En conjunto, los resultados invitan a una lectura menos personalizada y más estructural del desempeño nacional. El problema central no radica exclusivamente en quién gobierna, sino en cómo una sociedad selecciona, evalúa y limita a sus gobernantes. Cuando la incompetencia, la corrupción o la improvisación no generan costos sociales claros, los incentivos para mejorar la calidad de la gobernanza permanecen débiles. ¿Qué estímulos reales tiene un sistema político para transformarse cuando amplios sectores de la sociedad toleran —o relativizan— sus fallas más graves?

En síntesis, la discusión refuerza la tesis central del artículo: el desempeño político y económico del Ecuador responde a una interacción compleja entre educación, cultura política, clase media, economías ilícitas y capacidad estatal. Mientras estas dimensiones no se articulen de manera coherente, los cambios de gobierno seguirán produciendo variaciones superficiales, sin alterar los patrones estructurales que condicionan el desarrollo del país. El límite es estructural, no ideológico.

## Conclusión

El análisis desarrollado a lo largo de este estudio permite afirmar que la trayectoria política y económica del Ecuador no puede explicarse de manera satisfactoria a partir del signo ideológico de sus gobiernos ni de la figura del liderazgo presidencial en turno. La evidencia histórica, comparada y contextual examinada muestra que, pese a la alternancia entre proyectos de izquierda y derecha, los resultados estructurales del país han tendido a reproducir patrones persistentes de fragilidad institucional, baja productividad y elevada vulnerabilidad social. No es una coincidencia. Esta regularidad sugiere la presencia de factores más profundos, vinculados al entramado social, cultural e institucional, que condicionan de forma duradera el desempeño nacional.

Uno de los hallazgos centrales del trabajo es la desconexión entre la expansión de la educación formal y la consolidación de capacidades colectivas para la toma de decisiones políticas y económicas

complejas. Aunque Ecuador ha logrado avances relevantes en cobertura educativa, estos no se han traducido de manera equivalente en pensamiento crítico, cultura cívica ni inteligencia colectiva. Como consecuencia, el debate público y el comportamiento político continúan dominados por esquemas simplificadores, expectativas de corto plazo y una comprensión limitada de los principios que sostienen el Estado de derecho. La normalización social de la violencia —incluida la aceptación de dinámicas letales en el sistema penitenciario— constituye una expresión extrema de esta debilidad cognitiva y revela una erosión preocupante de normas jurídicas y morales fundamentales. Conviene subrayarlo.

El estudio pone también en evidencia el carácter ambivalente de la clase media ecuatoriana. Si bien este grupo concentra una parte sustantiva del capital humano del país y ocupa posiciones estratégicas en la administración pública y en sectores productivos clave, su elevada vulnerabilidad económica y social limita su capacidad para actuar como estabilizador institucional. La exposición recurrente a crisis fiscales, inseguridad y deterioro de servicios públicos ha reforzado comportamientos políticos defensivos, orientados a la protección inmediata del ingreso y a la aceptación pragmática de arreglos informales. Esta condición debilita la construcción de pactos sociales duraderos y reduce el respaldo ciudadano a reformas estructurales que requieren costos iniciales y beneficios de largo plazo. El margen de maniobra es estrecho.

Un aporte adicional del trabajo es la incorporación explícita de la dimensión del narcotráfico como factor estructural del debilitamiento institucional. La evidencia analizada muestra que la expansión de economías ilícitas no solo incrementa la violencia, sino que eleva los costos de gobernar, distorsiona los incentivos administrativos y erosiona la confianza social en el Estado. La penetración selectiva de nodos institucionales estratégicos —especialmente en seguridad, justicia y logística— resulta suficiente para afectar la implementación de políticas públicas, con independencia de la orientación ideológica de los gobiernos. Este fenómeno refuerza dinámicas de impunidad, alimenta demandas de soluciones excepcionales y profundiza la fragilidad del orden democrático. Basta poco para producir efectos amplios.

Las conclusiones confirman, además, la persistencia de una brecha estructural entre el diseño de políticas públicas y su ejecución. La expansión de la educación superior no ha estado acompañada de una profesionalización sostenida de la burocracia estatal ni de la consolidación de una carrera administrativa estable. La alta rotación de funcionarios, la politización de cargos técnicos y la debilidad de los sistemas de control interno reducen la capacidad del Estado para sostener políticas complejas en el tiempo. Este déficit de capacidad administrativa no solo limita los resultados de los gobiernos, sino que alimenta la desconfianza ciudadana y refuerza la demanda de liderazgos personalistas, cerrando un círculo vicioso difícil de revertir.

La comparación con experiencias internacionales exitosas —como Alemania, Japón, Corea del Sur, Suiza y los países nórdicos— refuerza la tesis central del artículo: el desarrollo sostenido no emerge de la aplicación rígida de una ideología específica, sino de la articulación pragmática de modelos mixtos respaldados por educación de calidad, cultura cívica robusta, inteligencia colectiva y ciudadanía capaz de exigir rendición de cuentas. En estos casos, la educación ha funcionado como un

medio para construir cohesión social y racionalidad política, no como un fin aislado ni meramente instrumental. El patrón es consistente.

Bajo esta lectura, las conclusiones del estudio invitan a desplazar el foco del análisis —y del debate público— desde los gobernantes hacia la sociedad que los elige, los tolera o los sanciona. La ciudadanía, y en particular la clase media situada en posiciones intermedias de decisión no es un actor pasivo en la trayectoria del país. Su nivel de exigencia, su tolerancia a la improvisación institucional, a la corrupción y a la violencia, así como su capacidad para sostener consensos de largo plazo, influyen de manera decisiva en los incentivos del sistema político. Esto suele pasarse por alto.

Finalmente, este trabajo no propone un diagnóstico fatalista ni exime de responsabilidad a los liderazgos políticos. Plantea, más bien, una lectura estructural que subraya los límites de las soluciones simplistas y de los cambios meramente ideológicos. Mientras la educación no se traduzca en pensamiento crítico colectivo, mientras la clase media continúe siendo estructuralmente vulnerable y mientras el Estado no consolide capacidades administrativas y de control efectivas, los cambios de gobierno seguirán produciendo resultados parciales y transitorios. Reconocer estas restricciones no resuelve el problema. Pero permite formular preguntas mejor orientadas y pensar estrategias de desarrollo más realistas, sostenibles y coherentes con la complejidad del caso ecuatoriano.

## Referencias

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. New York: Crown Business.
- Bertelsmann Stiftung. (2022). *BTI 2022 Country Report — Ecuador*. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.
- Bertelsmann Stiftung. (2024). *BTI 2024 Country Report — Ecuador*. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2023). *Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023: La inclusión laboral como eje central para el desarrollo social inclusivo*. Chile: Naciones Unidas / CEPAL.
- Conaghan, C. M. (1995). Politicians against parties: Discord and disconnection in Ecuador's party system. En *Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America* (págs. 434–458). Stanford, CA: Stanford University Press.
- De la Torre, C. (26 de febrero de 2018). *The Perils of Populist Succession in Ecuador*. Wilson Center: <https://www.wilsoncenter.org/>
- Global Initiative Against Transnational Organized Crime. (2025). *Ecuador: Global Organized Crime Index 2025 Country Profile*. Suiza: Global Initiative Against Transnational Organized Crime.
- Goldin, C., & Katz, L. F. (2008). *The Race Between Education and Technology*. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Human Rights Watch. (2024). *World Report 2024*. (H. R. Watch, Ed.)
- International Crisis Group. (2025). *Paradise Lost? Ecuador's Battle with Organised Crime*. Brussels: International Crisis Group.

**Citar (APA7):** Urgilés Buestán, P. (2026). *Más allá de la ideología: Educación, clase media y gobernanza en el Ecuador contemporáneo*. Prisma Journal, 2(2), 298–312. <https://doi.org/10.63803/prisma.v2n2.25>

Ministerio del Ambiente del Ecuador. (2016). *Estrategia Nacional de Biodiversidad 2015–2030*. Quito: Ministerio del Ambiente del Ecuador.

Monde, L. (15 de mayo de 2025). *Ecuador Plagued by “Narco-Bananas” Trafficking*. (L. Monde, Ed.)

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). *Under Pressure: The Squeezed Middle Class*. Paris: OECD Publishing.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *Public Integrity in Ecuador: Towards a National Integrity System*. Paris: OECD Publishing.

United Nations Development Programme. (2020). *Human Development Report 2020: The Next Frontier—Human Development and the Anthropocene*. New York: United Nations Development Programme.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). *Global Report on Cocaine 2023: Local Dynamics, Global Challenges*. Vienna: Global Report on Cocaine 2023: Local Dynamics, Global Challenges.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2024). *World Drug Report 2024*. Vienna: United Nations Publications.

World Bank. (2017). *World Development Report 2017: Governance and the Law*. Washington, DC: World Bank.

World Bank. (2018). *World Development Report 2018: Learning to Realize Education’s Promise*. Washington, DC: World Bank.

World Bank. (2021). *The Gradual Rise and Rapid Decline of the Middle Class in Latin America and the Caribbean*. Washington, DC: World Bank.

World Bank Group. (2024). *Ecuador Country Climate and Development Report*. Washington, DC: World Bank Group.